

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Pedro Vicente Morales
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 15 Laboral del Circuito
RADICADO	05001 3105 015 2021 00060 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 8 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Compatibilidad P. de I. riesgo profesional con la de vejez
DECISIÓN	Confirma derecho, modifica monto. Intereses a partir de ejecutoria de la sentencia porque sumatoria de tiempos surge con línea jurisprudencial a partir de 2020.

En la fecha, **siete (07) de febrero de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas María Eugenia Gómez Velásquez, Nancy Gutiérrez Salazar y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por los apoderados de ambas partes contra la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Pedro Vicente Morales** contra **Colpensiones**. Código de Radicado único nacional 05001 3105 **015 2020 00060** 01.

La Magistrada ponente, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado en sala virtual mediante acta N°. **02**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación.

Antecedentes

Pide el demandante, por conducto de su apoderado, se declare que la asiste derecho al reconocimiento y pago de pensión de vejez con los intereses moratorios por la tardanza en su otorgamiento, sin que ello signifique el cese en el pago de la pensión de invalidez de origen laboral que actualmente percibe, y como consecuencia, se condene a Colpensiones a su otorgamiento. Solicita también condena en costas y agencias en derecho.

En sustento de ello afirma que, **nació el 31 de diciembre de 1940**, el entonces ISS, mediante Resolución 05051 del 07 de octubre de 1991 **le reconoció pensión de invalidez de origen profesional**. Cotizó al sistema general de pensiones un total de **956,86 semanas**, y según certificado de tiempo CETIL, estuvo vinculado al Ministerio de Defensa Nacional (Servicio Militar Obligatorio), desde el 01 de mayo de 1959 hasta el 30 de octubre de 1960, con lo que acredita un número superior a **1.000 semanas**, y por ello, el **04 de noviembre de 2020, radicó ante Colpensiones petición de pensión de vejez**, negada con acto administrativo SUB 247836 del 17 del mismo mes y año, argumentando supuesta incompatibilidad con la de origen laboral.

Verificado el cumplimiento de los requisitos de ley, en auto del 26 de marzo de 2021, **se admitió** y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente enterada de la actuación, **Colpensiones** allegó contestación, aceptando la fecha de nacimiento del demandante, el otorgamiento por el ISS de pensión de invalidez de origen profesional, con acto administrativo del 07 de octubre de 1991, las cotizaciones efectuadas a la entidad por un total de 956,86 semanas, la reclamación de pensión de vejez y la respuesta negativa. Los demás supuestos no le constan. **Resistió** las pretensiones declarativas y de condena y formuló las **excepciones** de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de vejez, improcedencia de la obligación de pagar intereses moratorios o indexación, prescripción o caducidad de la acción, imposibilidad de condena en costas, buena fe de la entidad y la innominada o genérica.

La primera instancia terminó con **sentencia** proferida por el Juzgado Quince laboral del Circuito el 10 de noviembre de 2022, declarando que la pensión de vejez es compatible con la de invalidez de origen profesional y por tanto, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la primera bajo las reglas del Decreto 758 de 1990 en concordancia con el art. 36 ley 100 de 1993, con IBL de \$823.460,00, al que se le aplica tasa de reemplazo 75%, con una mesada inicial de \$617.595 para el año 2000, debidamente indexada. Declaró la prosperidad parcial de la excepción de prescripción frente las causadas con anterioridad al 05 de noviembre de 2017. Condenó a Colpensiones al pago del retroactivo generado entre el 05 de noviembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2022, que ascienden a **\$113.126.038**, y a continuar cancelando a partir del 1º de diciembre de 2022 una mensualidad por valor de **\$1.729.336**, sin perjuicio incrementos para los años subsiguientes, inicialmente dijo por trece **pero luego aclaró que son 14 al año**. Absolvió de los intereses moratorios, desestimó los demás medios exceptivos y en el evento de no apelarse, dispuso el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones.

Argumentó la falladora que desde el año 2009 ha sido clara la línea de la jurisprudencia especializada en indicar la **compatibilidad** entre las pensiones de invalidez de origen profesional y la de vejez, leyendo pasajes de algunas sentencias y citando algunas radicaciones, precisando que al percibir el actor **pensión de origen profesional**, otorgada por el entonces ISS, mediante Resolución 05052 del 07 de octubre de 1991, con disfrute desde el 21 de febrero del mismo año, con monto inicial de \$60.396; al nacer el **31 de diciembre de 1940, para el 1º de abril de 1994**, contaba con más de 40 años de edad, cotizando al régimen de prima media un total de **956,86 semanas, entre el 1º de enero de 1967 y el 02 de octubre de 1990**, no acreditaría **500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad ni 1.000 en cualquier época**; pero con certificado CETIL demuestra prestación de servicio militar entre el **01 de mayo de 1959 y el 31 de octubre de 1960**, por un total de 540 días, equivalentes a **77,14, para un total de 1.034 semanas**, debidamente contabilizadas por Colpensiones en acto administrativo

SUB 2476836 del 17 de noviembre de 2020, en el que negó la prestación por vejez, superando así las mil en toda la vida que le dan derecho al disfrute de la prestación reclamada, desde la calenda en que arribó a los 60 años, esto es, **31 de diciembre de 2000, pero como reclamó la misma el 04 de noviembre de 2020, se extinguieron por prescripción las causadas con antelación a similar calenda del año 2017,** y una vez efectuada la liquidación le resultó más favorable el IBL de los últimos diez años, cuantificando el retroactivo desde el 05 de noviembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2022, imponiendo condena en concreto. Desestimó la súplica por intereses moratorios al haber sido valida la argumentación de Colpensiones para negar el derecho y actuar en defensa del patrimonio público, en subsidio dispuso la indexación de los valores adeudados. Autorizó a Colpensiones para efectuar el descuento de los aportes en salud a cargo del demandante. Gravó con costas a Colpensiones y fijó el monto de las agencias en derecho.

Ambas partes **interpusieron recurso de apelación,** así.

Demandante. Comparte la decisión de reconocer la pensión de vejez al ser compatible con la de invalidez de origen profesional, pero **recurre la negativa a los intereses moratorios,** porque si bien es cierto se ha determinado por la jurisprudencia que en aquéllos casos en que existe negativa con fundamento en pronunciamiento de las altas cortes, o se actúa en cumplimiento de un deber legal, los mismos resultan improcedentes, en este caso hay lugar a su imposición por existir precedente de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la compatibilidad entre ambas prestaciones, el cual no es reciente pues data desde el 2009, con más de una década de evolución del cambio de criterio, por tanto a la fecha de resolver para Colpensiones tal postura no era un hecho nuevo, sin que se esté ante los supuestos que eximen de tal condena, pudiendo la entidad acoger esta tesis en sus directivas internas, tal como lo hizo con la condición más beneficiosa, y otorgar la prestación desde un primer momento.

Colpensiones. Manifiesta inconformidad con la totalidad de la sentencia, porque mediante Resolución 05052 del 07 de octubre de 1991 el ISS reconoció pensión de invalidez de origen profesional al demandante a partir del 21 de febrero de tal anualidad, en cuantía de \$60.396. El 04 de noviembre de 2020 solicitó el otorgamiento de pensión de vejez, negada por la Oficina Asesora de Asuntos Legales que estableció los parámetros para la conversión de la pensión de invalidez a vejez, resaltando el mismo aparte contenido en el acto administrativo que negó la prestación, esto es que la pensión de invalidez garantiza la protección del derecho fundamental a la seguridad social a quienes *han perdido su capacidad laboral con ocasión de la ocurrencia de una enfermedad o accidente de origen común para que sean protegidos y amparados siempre y cuando cumplan los requisitos de ley para el otorgamiento y pago de la prestación periódica*, estando sometida su continuidad a la revisión del estado de invalidez para quienes se encuentren próximos a cumplir 57 ó 62 años, lo que no implica transgresión de derecho alguno, y no es posible la aplicación del inciso 3º del art. 10 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, al régimen de prima media administrado por Colpensiones, pues solamente cuando el pensionado por invalidez acredita la edad y las semanas de cotización establecidas en el sistema general de pensiones, su prestación podría transformarse en pensión de vejez. También el Acto Legislativo 01 de 2005, establece que para adquirir el derecho a pensión de vejez es necesario cumplir la edad, semanas, tiempo de servicio o el capital, así como las demás condiciones de ley, por lo que no es dable ser beneficiario de pensión de vejez sin cumplir las semanas y edad exigidas por las disposiciones de RPMPD, siendo la norma vigente para la pensión de vejez la Ley 797 de 2003, que exige 62 años para los hombres y haber cotizado 1300 semanas. Por lo tanto, además de la incompatibilidad entre la prestación solicitada y la devengada, el demandante no acredita la densidad de semanas requeridas, remitiéndose también al artículo 128 Superior que impide la percepción de doble asignación del Tesoro Público, salvo los casos expresamente determinados por la Ley, por lo que ruega no acoger lo pedido, y revocar en su totalidad la decisión.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Teniendo en cuenta los planteamientos de los recurrentes y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, le corresponde a esta instancia establecer si como lo indicó la a quo, **son compatibles la pensión de invalidez de origen profesional y la de vejez**; de ser afirmativa la respuesta sobre este particular, se determinará si el demandante es beneficiario de régimen de transición – artículo 36 Ley 100 de 1993, en concordancia con los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y por tanto si puede obtener pensión de vejez bajo tal reglamentación, incluyendo para completar la densidad de semanas el tiempo de prestación de servicio militar, definiéndose la fecha de causación, la de disfrute, el monto de la mesada, y el del retroactivo adeudado. Luego se estudiara el tema atinente a la **condena por intereses moratorios** y finalmente lo relacionado con las **costas**.

Sobre el primer punto, esto es, **compatibilidad entre las pensiones de invalidez de origen profesional y de vejez**, ninguna razón le asiste al apoderado de la entidad demandada en los argumentos de apelación, pues nótese como hace expresa alusión a la **pensión de invalidez de origen común, la que en efecto no puede devengarse simultáneamente con la de vejez, por expresa prohibición legal, y cuando se percibe la de invalidez y se cumplen los requisitos para la de vejez, se da el fenómeno de la conversión, solo en el caso de que esta resulte más favorable**, pero en el **asunto a estudio** el demandante disfruta de **pensión de invalidez de origen profesional, como claramente se dejó establecido en Resolución 05052 del 07 de octubre de 1991**, aportada al plenario, y citada por la defensa de la pasiva, existiendo, como se refiere por el apoderado de la parte actora y de la a quo, línea pacífica de la jurisprudencia

especializada sobre el tema de la **compatibilidad** invocada, resultando para el caso ilustrativo citar in extenso, aparte de la **sentencia SL3869-2021**, en la que sobre el particular se dijo:

Le corresponde a la Corte dilucidar si la pensión de invalidez de origen profesional que le fue reconocida al demandante en 1975, es compatible con la pensión de vejez que le reconoció el ISS a partir del año 2001.

Desde la sentencia CSJ SL, 1º dic. 2009, rad. 33558, reiterada en CSJ SL153-2014, CSJ SL9282-2014, CSJ SL10250-2014, CSJ SL17433-2014, CSJ SL17447-2014, CSJ SL 2096-2015, CSJ SL12155 de 2015, CSJ SL18072-2016, CSJ SL1764-2018, CSJ SL1244-2019, entre otras, esta Sala es del criterio que las pensiones de invalidez de origen laboral y de jubilación o vejez son compatibles, puesto que cubren riesgos distintos, tienen fuentes de financiación autónomas y una reglamentación distinta.

En esta oportunidad, la Corte sostiene ese mismo pensamiento. Más allá de si las pensiones tienen o no una regulación especializada, pues a la larga las diferentes pensiones del sistema de seguridad social tienen su propia estructura normativa, considera la Sala que **el hecho de que las pensiones cubran riesgos o contingencias distintas y tengan una fuente de recaudo y de financiación autónoma, son factores relevantes a la hora de determinar la compatibilidad pensional.**

En el caso de las pensiones de invalidez de origen laboral y de vejez es claro que tienen fuentes de financiación independientes, también es diáfano que protegen contingencias bien distintas.

En efecto, **la pensión de invalidez de origen laboral cubre el riesgo derivado del trabajo**, cuando una persona en razón de las condiciones o el ambiente en el que labora o por circunstancias relacionadas con este, sufre una enfermedad o enfrenta un accidente de trabajo que afecta su desempeño en determinado oficio. Por tanto, es una cobertura propia del trabajo, para cuyo aseguramiento los empleadores, mediante la afiliación y el pago de una prima o cotización, trasladan el riesgo al sistema, a fin de que este otorgue las prestaciones asistenciales y económicas previstas en la legislación.

La pensión de vejez es el reconocimiento que el sistema previsional hace a una persona que prestó su fuerza laboral durante muchos años y que tiene como finalidad garantizar la seguridad económica del trabajador, sustituyendo sus ingresos laborales por una prestación a cargo del sistema. La Corte Constitucional la ha definido como «*un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo, por lo que el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años es debido al trabajador*» (C-546-1992).

Como se puede observar, **se trata de contingencias muy diferentes.** Ahora bien, para establecer si determinadas prestaciones protegen o no riesgos distintos, es inapropiado acudir a patrones abstractos y etéreos como el hecho de ser titular de un beneficio o asistencia del sistema de seguridad social o estar amparado previamente frente a una situación de precariedad o inseguridad económica. Si así fuera, serían

incompatibles las pensiones de sobrevivientes y la de vejez que logren construir con su trabajo las parejas de los afiliados o pensionados fallecidos.

Así mismo, estas aproximaciones tan genéricas desatienden que el sistema de seguridad social está estructurado por segmentos que brindan coberturas a diferentes necesidades y ciclos en la vida del ser humano (p.e. en el trabajo o como persona en inactividad laboral, en el bienestar, la salud, la familia), y pasan por alto que las pensiones son un derecho social construido con el esfuerzo y el trabajo de las personas para protegerse a sí mismas y a sus familias, de manera que no pueden concebirse como dádivas, asistencias o auxilios del Estado.

Tampoco es plausible acudir a criterios como la pérdida o disminución de la capacidad laboral, para afirmar que tanto la vejez como la invalidez implican un deterioro de las capacidades productivas y, por tanto, las pensiones otorgadas recaen sobre el mismo riesgo. Tal abordaje cae en el prejuicio según el cual los afiliados en edad pensional perdieron su capacidad laboral o son inválidos, lo cual reproduce prácticas discriminatorias hacia las personas mayores y banaliza los importantes aportes que hacen al mundo laboral y al crecimiento económico con base en su experiencia, madurez y conocimiento acumulado por largos años de vida.

Por tanto, es desafortunado el argumento de la entidad de seguridad social recurrente, cuando afirma que tanto la pensión de vejez como la de invalidez cubren el mismo riesgo: la imposibilidad de trabajar.

En cuanto a que el artículo 13, literal j) de la Ley 100 de 1993 prohíbe devengar simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez, precisa la Sala que dicha regla tiene aplicabilidad en el marco del sistema general de pensiones. Nótese que el artículo que incorpora ese enunciado define las características del sistema general de pensiones, de manera que lo que allí se prohíbe es que una persona devengue al mismo tiempo una pensión de invalidez de origen común y una de vejez, lo que en modo alguno significa que una persona inválida no puede trabajar, como lo afirma Positiva S.A. en su recurso. Nada impide que un pensionado por invalidez de origen común se reincorpore al mundo laboral y realice aportes con la pretensión de reemplazar su prestación por una de vejez que le brinde mejor bienestar y más calidad de vida.

Por otro lado, no es razonable entender que la regla del artículo 13, literal j) de la Ley 100 de 1993 es omnicompreensiva de las pensiones de invalidez de origen común y laboral, puesto que, a diferencia de la primera, la segunda cuenta con una fuente de financiación autónoma, derivada de un esquema típico de seguros, en el cual el tomador -empleador- paga una prima o cotización a una aseguradora -ARL hoy ARP-, la cual debe responder por las prestaciones asistenciales y económicas en caso de verificarse un siniestro -accidente o enfermedad laboral-. Lo anterior descarta cualquier afectación a la sostenibilidad financiera del sistema.

Ni siquiera al amparo de normas más recientes del sistema general de riesgos laborales, tales como las leyes 776 de 2002 o la 1562 de 2012, es factible predicar tal incompatibilidad. En efecto, el parágrafo 2º del artículo 10º de la Ley 776 de 2002, habilita la compatibilidad de pensiones del régimen común y profesional, salvo que tengan origen «en el mismo evento». Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando un afiliado pretende reutilizar una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% acaecida durante un accidente de trabajo para obtener una pensión de invalidez laboral y otra de origen común. Nótese que en el ejemplo un mismo evento se estaría usando para extraer dos pensiones a cargo del sistema previsional.

A su vez, el numeral 3° del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012, ordena la afiliación obligatoria al sistema de riesgos laborales de *«los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos»*, precepto que además de reconocer las capacidades productivas de las personas mayores, obliga a protegerlas frente a los riesgos del trabajo que puedan afectarlas o anularlas.

Asimismo, un pensionado por invalidez de origen laboral puede reincorporarse al mundo laboral para explotar sus destrezas, habilidades y conocimientos en oficios y actividades técnicas, profesionales o artísticas. De hecho, personas declaradas inválidas lo hacen exitosamente. Por ello, no debería existir objeción en que los pensionados puedan, a pesar de su invalidez, seguir cotizando al sistema general de pensiones para construir una pensión de vejez, producto de las actividades y oficios en los cuales construyeron su identidad y reafirmaron sus capacidades individuales y laborales en beneficio de la comunidad y la economía.

En este orden de ideas, el artículo 15 de la Ley 776 de 2002, según el cual cuando un afiliado se invalide como consecuencia de un infortunio laboral, *«además de la pensión de invalidez... se [le] entregará»* la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva, debe interpretarse como una opción de los pensionados y no como una imposición. Entre otras cosas, porque de entenderse como una imposición, ello supondría una violación al derecho al trabajo y a la seguridad social inclusiva de estas personas, la mayoría de las cuales tienen discapacidades y por ello tienen garantizados sus derechos en instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adicionalmente, porque la propia Ley 776 de 2002 en su artículo 10°, parágrafo 2°, admite la compatibilidad de pensiones de los sistemas común y profesional originadas en un evento distinto, de manera que no tendría sentido que luego en su artículo 15 prohibiera esa acumulación prestacional.

Citación que resulta plenamente aplicable al caso a estudio, por lo **se confirma la decisión en este apartado.**

Definido lo anterior queda por establecer si el señor **Pedro Vicente**, acredita los requisitos para obtener pensión de vejez, bajo los supuestos del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Queda demostrado que el demandante **nació el 31 de diciembre de 1940, por lo que al 1° de abril de 1994**, fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, contaba con más de 40 años de edad; demostrando cotizaciones al sistema pensional entre el **01 de**

enero de 1967 y el 02 de octubre de 1990 por un total de 956,86 semanas, a las que se deben adicionar las acreditadas con Certificación Electrónica de Tiempos Laborados CETIL, para el Ejército Nacional, **entre el 01 de mayo de 1959 y el 30 de octubre de 1960, equivalentes a 77,14 semanas,** para un acumulado de **1.034 semanas,** tal como se deja consignado en Resolución SUB247836 del 17 de noviembre de 2020, mediante la cual Colpensiones negó la pensión de vejez solicitada por el demandante el **04 de noviembre de 2020.**

Y si bien con las semanas directamente aportadas el demandante no alcanza las exigidas por la norma cuya aplicación se invoca, 500 en los últimos 20 años o 1.000 en cualquier época, debe recordarse que si bien la jurisprudencia especializada sostuvo por varios años que no era posible sumar los tiempos públicos no aportados al ISS con las cotizaciones efectivamente realizadas al RPM administrado hoy por Colpensiones, a efectos de obtener la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, como se expuso, entre otras, en CSJ SL032-2018 reiterada en la CSJ SL1652-2018, tal tesis fue variada a partir de la providencia SL1947-2020, en la que se dijo:

... ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas.

Lo anterior, con fundamento en que el propósito de la Ley 100 de 1993 fue superar y unificar los distintos regímenes pensionales existentes que condicionaban la validez del tiempo laborado en diferentes circunstancias, por ejemplo, que hubiesen sido cotizados o laborados en el sector público. Esta legislación tomó el trabajo humano como referente para construir la pensión y por tanto no admitió distinciones, tal como se desprende de lo dispuesto en el literal f) del artículo 13, que establece:

Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.

También se consideró que esa convalidación de todos los tiempos laborados se hace extensiva a los beneficiarios del régimen de transición, por cuanto: **i)** no están excluidos sino que hacen parte del actual sistema general de pensiones, de ahí que les sean aplicables sus reglas, excepto frente a los tres elementos que se mantienen de los regímenes pensionales anteriores: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto; **ii)** precisamente es esta población la que sufría las consecuencias de la dispersión de regímenes en los que se establecían ciertas condiciones para la validez del tiempo trabajado para efectos pensionales y **iii)** porque así lo previó expresamente el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al ordenar que se tuvieran en cuenta las semanas cotizadas al ISS, cajas, fondos o entidades del seguridad social del sector público o privado y el tiempo de servicios público. Así, en CSJ SL1981-2020, se explicó:

Desde este punto de vista, se asevera que a diferencia de los regímenes anteriores, la Ley 100 de 1993 tuvo un efecto homogeneizador que se traduce en la convalidación de todos los tiempos laborados, lo cual se hace extensivo a los beneficiarios del régimen de transición, no solo porque a ellos les aplica en su plenitud las reglas del sistema general de pensiones, salvo en lo que concierne a la edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto; también porque estas personas eran las que sufrían las consecuencias de la legislación preexistente, caracterizadas por la dispersión de regímenes y responsabilidades, donde algunas semanas eran desechadas o reputadas como no válidas para pensión.

[...] De esta forma, el régimen de transición no es un mundo separado o excluido de la Ley 100 de 1993, es una regulación especial englobada en la misma, a través del cual se otorga a ciertas personas la posibilidad de pensionarse con base en la edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la ley anterior, quedando todo lo demás sometido al imperio de aquella normativa.

Lo anterior significa que para estas personas la forma de computar o establecer el número de semanas se rige por lo dispuesto en el literal f) del artículo 13 y el parágrafo 1.º del artículo 33, disposiciones que, expresamente, consagran la suma de tiempos públicos, hayan sido o no objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de

previsión

social.

Por tanto, no hay razón alguna que justifique inaplicar las normas en cita para los beneficiarios del régimen de transición cuyo régimen anterior es el del Acuerdo 049 de 1990, pues, en estricto rigor, dichas personas están afiliadas al sistema general de pensiones, conforme lo prevé el artículo 15 de la Ley 100 de 1993. Luego, les asiste el derecho a la portabilidad de las semanas efectivamente laboradas, independientemente de que su empleador público no las hubiera cotizado al ISS o a otra caja o entidad de previsión social.

Con otras palabras: si los beneficiarios del régimen de transición son afiliados al sistema general de pensiones y están sometidos a su regulación -salvo los tres aspectos referidos-, ello aparece como consecuencia lógica el derecho a que las directrices y principios rectores de este sistema se les aplique, de manera axiológicamente coherente, de manera integral, tal como ocurre con la posibilidad que se contabilicen en su favor todas las semanas laboradas para el otorgamiento de las prestaciones. (Lo resaltado no es del texto original).

...

De todo lo anterior se concluye:

(i) El sistema de seguridad social, inspirado en el principio de universalidad y el trabajo como referente de construcción de la pensión, reconoce validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados.

(ii) En tal dirección, el literal f) del artículo 13 refiere que para el reconocimiento de las pensiones del sistema se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el lapso laborado.

(iii) Los beneficiarios del régimen de transición, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas laboradas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS, hoy Colpensiones.

(iv) Esta regla de cardinal importancia la resaltó el legislador en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al habilitar para los beneficiarios del régimen de transición, los tiempos públicos y privados, cotizados o no a entidades de previsión social o al ISS.

(v) Para darle viabilidad a esta posibilidad legal de integrar las semanas laboradas en el sector público sin cotización al ISS, la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios regulan extensamente todo un régimen financiación de las prestaciones a través de cuotas partes y títulos pensionales.

Luego, al gozar el demandante de régimen de transición por edad, arribando a los 60 años el 31 de diciembre de 2000, y acumulando para entonces un total

de **1.034 semanas**, tal como se indica en la Resolución SUB 247836 del **17 de noviembre de 2020**, supera los requisitos para la concesión de la **pensión de vejez reclamada**, con extinción por prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 04 de noviembre de 2017, como lo explicó la a quo, al haberse reclamado en similar fecha del 2020.

Frente a la liquidación de la mesada, teniendo en cuenta la historia laboral allegada como prueba oficiosa a esta instancia, y que el afiliado solo acredita **1.034 semanas**, solo es viable la aplicación de la formula correspondiente a los últimos diez años, obteniéndose para el año **2.000 cuando se causó, una mesada equivalente a \$590.748,00** que actualizada al **mes de noviembre de 2017**, asciende a **\$1.382.589**, adeudándose por retroactivo causado entre el **05 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2022**, la suma de **\$111.512.137,00**, siendo la mesada para el mes de diciembre de 2022, la suma de **\$1.654.161,00**, 14 al año, con los ajustes que a futuro decreta el Gobierno Nacional.

En cuanto a los **intereses moratorios**, si bien es cierto desde el año 2009 se tiene línea consolidada frente a la **compatibilidad de la pensión de invalidez profesional con la de vejez**, no ocurre lo mismo con la **sumatoria de tiempos cotizados y de servicio público**, que como se vio solo varió en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir del mes de julio de 2020, y se fortaleció con **posterioridad a tal calenda**, y si bien es cierto tal argumento no fue invocado, también lo es que el otorgamiento de la prestación por vejez obedece a esta orientación jurisprudencial, **por lo que se considera razonable imponer su pago a partir de la ejecutoria de esta decisión**, al quedar definida la procedencia del derecho pensional reclamado, **manteniendo la indexación** ordenada por la a quo, desde el momento de causación de cada mesada, hasta la fecha en que empiezan a correr los intereses de mora, como ya se dijo, **fecha de ejecutoria de esta sentencia**.

Por último, en lo atinente a la **condena en costas a Colpensiones**, baste advertir que las mismas son una simple consecuencia procesal del ejercicio de la acción o de la excepción, que se traduce en una obligación que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir (auto Sala de Casación laboral Corte Suprema del 24 de enero de 2007, radicado 31.155, reiterado en sentencia SL 5141-2019), sin que sea dable entrar a analizar la buena o mala fe de la entidad en el transcurso del proceso, por lo que se mantiene la misma en primera instancia.

Ante el resultado adverso de los recursos interpuestos, no hay lugar a condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **modifica** la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Pedro Vicente Morales** contra **Colpensiones**, para indicar que el valor adeudado por mesadas retroactivas causadas entre el 05 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2022, asciende a \$111.512.137,00. La pensión al mes de diciembre de 2022 equivale a \$1.654.161,00, catorce mesadas al año, con los incrementos que a futuro decrete el Gobierno Nacional.

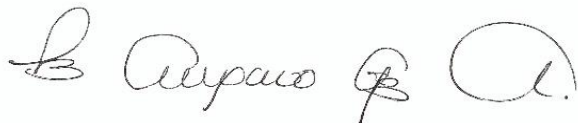
Modifica también para disponer el reconocimiento y pago al demandante por parte de Colpensiones de **intereses moratorios sobre las mesadas adeudadas a partir de la ejecutoria de la sentencia**, manteniendo la orden de indexación desde la acusación de cada una hasta tal calenda – fecha de ejecutoria de esta sentencia.

En lo demás confirma.

Al desatarse adversamente los recursos interpuestos por ambas partes, no hay lugar a condena en costas.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijará por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DIAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
1-jul-75	31-jul-75	\$ 3.300	9	\$ 530.075	\$ 1.325	1999	39,79	1974	0,25
1-ago-75	31-ago-75	\$ 3.300	31	\$ 530.075	\$ 4.565	1999	39,79	1974	0,25
1-sep-75	30-sep-75	\$ 3.300	30	\$ 530.075	\$ 4.417	1999	39,79	1974	0,25
1-oct-75	31-oct-75	\$ 3.300	31	\$ 530.075	\$ 4.565	1999	39,79	1974	0,25
1-nov-75	30-nov-75	\$ 3.300	30	\$ 530.075	\$ 4.417	1999	39,79	1974	0,25
1-dic-75	31-dic-75	\$ 3.300	31	\$ 530.075	\$ 4.565	1999	39,79	1974	0,25
1-ene-76	31-ene-76	\$ 3.300	31	\$ 450.124	\$ 3.876	1999	39,79	1975	0,29
1-feb-76	29-feb-76	\$ 3.300	29	\$ 450.124	\$ 3.626	1999	39,79	1975	0,29
1-mar-76	31-mar-76	\$ 3.300	31	\$ 450.124	\$ 3.876	1999	39,79	1975	0,29
1-abr-76	30-abr-76	\$ 3.300	30	\$ 450.124	\$ 3.751	1999	39,79	1975	0,29
1-may-76	31-may-76	\$ 3.300	31	\$ 450.124	\$ 3.876	1999	39,79	1975	0,29

1-jun-76	30-jun-76	\$ 3.300	30	\$ 450.124	\$ 3.751	1999	39,79	1975	0,29
1-jul-76	31-jul-76	\$ 3.300	31	\$ 450.124	\$ 3.876	1999	39,79	1975	0,29
1-ago-76	31-ago-76	\$ 3.300	31	\$ 450.124	\$ 3.876	1999	39,79	1975	0,29
1-sep-76	30-sep-76	\$ 4.410	30	\$ 601.529	\$ 5.013	1999	39,79	1975	0,29
1-oct-76	31-oct-76	\$ 4.410	31	\$ 601.529	\$ 5.180	1999	39,79	1975	0,29
1-nov-76	30-nov-76	\$ 4.410	30	\$ 601.529	\$ 5.013	1999	39,79	1975	0,29
1-dic-76	31-dic-76	\$ 5.790	31	\$ 789.762	\$ 6.801	1999	39,79	1975	0,29
1-ene-77	31-ene-77	\$ 5.790	31	\$ 627.965	\$ 5.407	1999	39,79	1976	0,37
1-feb-77	28-feb-77	\$ 5.790	28	\$ 627.965	\$ 4.884	1999	39,79	1976	0,37
1-mar-77	31-mar-77	\$ 5.790	31	\$ 627.965	\$ 5.407	1999	39,79	1976	0,37
1-abr-77	30-abr-77	\$ 5.790	30	\$ 627.965	\$ 5.233	1999	39,79	1976	0,37
1-may-77	31-may-77	\$ 5.790	31	\$ 627.965	\$ 5.407	1999	39,79	1976	0,37
1-jun-77	30-jun-77	\$ 5.790	30	\$ 627.965	\$ 5.233	1999	39,79	1976	0,37
1-jul-77	31-jul-77	\$ 5.790	31	\$ 627.965	\$ 5.407	1999	39,79	1976	0,37
1-ago-77	31-ago-77	\$ 5.790	31	\$ 627.965	\$ 5.407	1999	39,79	1976	0,37
1-sep-77	30-sep-77	\$ 5.790	30	\$ 627.965	\$ 5.233	1999	39,79	1976	0,37
1-oct-77	31-oct-77	\$ 5.790	31	\$ 627.965	\$ 5.407	1999	39,79	1976	0,37
1-nov-77	30-nov-77	\$ 5.790	30	\$ 627.965	\$ 5.233	1999	39,79	1976	0,37
1-dic-77	31-dic-77	\$ 5.790	31	\$ 627.965	\$ 5.407	1999	39,79	1976	0,37
1-ene-78	31-ene-78	\$ 5.790	31	\$ 487.844	\$ 4.201	1999	39,79	1977	0,47
1-feb-78	28-feb-78	\$ 5.790	28	\$ 487.844	\$ 3.794	1999	39,79	1977	0,47
1-mar-78	31-mar-78	\$ 5.790	31	\$ 487.844	\$ 4.201	1999	39,79	1977	0,47
1-abr-78	30-abr-78	\$ 5.790	30	\$ 487.844	\$ 4.065	1999	39,79	1977	0,47
1-may-78	31-may-78	\$ 7.470	31	\$ 629.394	\$ 5.420	1999	39,79	1977	0,47
1-jun-78	30-jun-78	\$ 7.470	30	\$ 629.394	\$ 5.245	1999	39,79	1977	0,47
1-jul-78	31-jul-78	\$ 7.470	31	\$ 629.394	\$ 5.420	1999	39,79	1977	0,47
1-ago-78	31-ago-78	\$ 7.470	31	\$ 629.394	\$ 5.420	1999	39,79	1977	0,47
1-sep-78	30-sep-78	\$ 7.470	30	\$ 629.394	\$ 5.245	1999	39,79	1977	0,47
1-oct-78	31-oct-78	\$ 7.470	31	\$ 629.394	\$ 5.420	1999	39,79	1977	0,47
1-nov-78	30-nov-78	\$ 7.470	30	\$ 629.394	\$ 5.245	1999	39,79	1977	0,47
1-dic-78	31-dic-78	\$ 7.470	31	\$ 629.394	\$ 5.420	1999	39,79	1977	0,47
1-ene-79	31-ene-79	\$ 9.480	31	\$ 674.455	\$ 5.808	1999	39,79	1978	0,56
1-feb-79	28-feb-79	\$ 9.480	28	\$ 674.455	\$ 5.246	1999	39,79	1978	0,56
1-mar-79	31-mar-79	\$ 9.480	31	\$ 674.455	\$ 5.808	1999	39,79	1978	0,56
1-abr-79	30-abr-79	\$ 9.480	30	\$ 674.455	\$ 5.620	1999	39,79	1978	0,56
1-may-79	31-may-79	\$ 9.480	31	\$ 674.455	\$ 5.808	1999	39,79	1978	0,56
1-jun-79	30-jun-79	\$ 9.480	30	\$ 674.455	\$ 5.620	1999	39,79	1978	0,56
1-jul-79	31-jul-79	\$ 9.480	31	\$ 674.455	\$ 5.808	1999	39,79	1978	0,56
1-ago-79	31-ago-79	\$ 9.480	31	\$ 674.455	\$ 5.808	1999	39,79	1978	0,56
1-sep-79	30-sep-79	\$ 9.480	30	\$ 674.455	\$ 5.620	1999	39,79	1978	0,56
1-oct-79	31-oct-79	\$ 9.480	31	\$ 674.455	\$ 5.808	1999	39,79	1978	0,56
1-nov-79	30-nov-79	\$ 9.480	30	\$ 674.455	\$ 5.620	1999	39,79	1978	0,56
1-dic-79	31-dic-79	\$ 11.850	31	\$ 843.069	\$ 7.260	1999	39,79	1978	0,56
1-ene-80	31-ene-80	\$ 11.850	31	\$ 654.577	\$ 5.637	1999	39,79	1979	0,72
1-feb-80	29-feb-80	\$ 11.850	28	\$ 654.577	\$ 5.091	1999	39,79	1979	0,72
1-mar-80	31-mar-80	\$ 11.850	31	\$ 654.577	\$ 5.637	1999	39,79	1979	0,72
1-abr-80	30-abr-80	\$ 11.850	30	\$ 654.577	\$ 5.455	1999	39,79	1979	0,72
1-may-80	31-may-80	\$ 11.850	31	\$ 654.577	\$ 5.637	1999	39,79	1979	0,72
1-jun-80	30-jun-80	\$ 11.850	30	\$ 654.577	\$ 5.455	1999	39,79	1979	0,72
1-jul-80	31-jul-80	\$ 11.850	31	\$ 654.577	\$ 5.637	1999	39,79	1979	0,72
1-ago-80	31-ago-80	\$ 11.850	31	\$ 654.577	\$ 5.637	1999	39,79	1979	0,72
1-sep-80	30-sep-80	\$ 11.850	30	\$ 654.577	\$ 5.455	1999	39,79	1979	0,72
1-oct-80	31-oct-80	\$ 11.850	31	\$ 654.577	\$ 5.637	1999	39,79	1979	0,72
1-nov-80	30-nov-80	\$ 11.850	30	\$ 654.577	\$ 5.455	1999	39,79	1979	0,72
1-dic-80	31-dic-80	\$ 11.850	31	\$ 654.577	\$ 5.637	1999	39,79	1979	0,72
1-ene-81	31-ene-81	\$ 11.850	31	\$ 520.241	\$ 4.480	1999	39,79	1980	0,91
1-feb-81	28-feb-81	\$ 11.850	29	\$ 520.241	\$ 4.191	1999	39,79	1980	0,91
1-mar-81	31-mar-81	\$ 11.850	31	\$ 520.241	\$ 4.480	1999	39,79	1980	0,91
1-abr-81	30-abr-81	\$ 11.850	30	\$ 520.241	\$ 4.335	1999	39,79	1980	0,91
1-may-81	31-may-81	\$ 21.420	31	\$ 940.385	\$ 8.098	1999	39,79	1980	0,91
1-jun-81	30-jun-81	\$ 21.420	30	\$ 940.385	\$ 7.837	1999	39,79	1980	0,91
1-jul-81	31-jul-81	\$ 30.150	31	\$ 1.323.651	\$ 11.398	1999	39,79	1980	0,91
1-ago-81	31-ago-81	\$ 30.150	31	\$ 1.323.651	\$ 11.398	1999	39,79	1980	0,91
1-sep-81	30-sep-81	\$ 30.150	30	\$ 1.323.651	\$ 11.030	1999	39,79	1980	0,91
1-oct-81	31-oct-81	\$ 39.310	31	\$ 1.725.795	\$ 14.861	1999	39,79	1980	0,91
1-nov-81	30-nov-81	\$ 39.310	30	\$ 1.725.795	\$ 14.382	1999	39,79	1980	0,91
1-dic-81	31-dic-81	\$ 39.310	31	\$ 1.725.795	\$ 14.861	1999	39,79	1980	0,91

1-ene-82	31-ene-82	\$ 39.310	31	\$ 1.366.368	\$ 11.766	1999	39,79	1981	1,14
1-feb-82	28-feb-82	\$ 39.310	28	\$ 1.366.368	\$ 10.627	1999	39,79	1981	1,14
1-mar-82	31-mar-82	\$ 39.310	31	\$ 1.366.368	\$ 11.766	1999	39,79	1981	1,14
1-abr-82	30-abr-82	\$ 39.310	30	\$ 1.366.368	\$ 11.386	1999	39,79	1981	1,14
1-may-82	31-may-82	\$ 39.310	31	\$ 1.366.368	\$ 11.766	1999	39,79	1981	1,14
1-jun-82	30-jun-82	\$ 39.310	30	\$ 1.366.368	\$ 11.386	1999	39,79	1981	1,14
1-jul-82	31-jul-82	\$ 39.310	31	\$ 1.366.368	\$ 11.766	1999	39,79	1981	1,14
1-ago-82	31-ago-82	\$ 39.310	31	\$ 1.366.368	\$ 11.766	1999	39,79	1981	1,14
1-sep-82	30-sep-82	\$ 25.530	30	\$ 887.392	\$ 7.395	1999	39,79	1981	1,14
1-feb-88	29-feb-88	\$ 99.630	28	\$ 1.101.792	\$ 8.569	1999	39,79	1987	3,60
1-mar-88	31-mar-88	\$ 99.630	31	\$ 1.101.792	\$ 9.488	1999	39,79	1987	3,60
1-abr-88	30-abr-88	\$ 99.630	30	\$ 1.101.792	\$ 9.182	1999	39,79	1987	3,60
1-may-88	31-may-88	\$ 99.630	31	\$ 1.101.792	\$ 9.488	1999	39,79	1987	3,60
1-jun-88	30-jun-88	\$ 99.630	30	\$ 1.101.792	\$ 9.182	1999	39,79	1987	3,60
1-jul-88	31-jul-88	\$ 99.630	31	\$ 1.101.792	\$ 9.488	1999	39,79	1987	3,60
1-ago-88	31-ago-88	\$ 99.630	31	\$ 1.101.792	\$ 9.488	1999	39,79	1987	3,60
1-sep-88	30-sep-88	\$ 99.630	30	\$ 1.101.792	\$ 9.182	1999	39,79	1987	3,60
1-oct-88	31-oct-88	\$ 99.630	31	\$ 1.101.792	\$ 9.488	1999	39,79	1987	3,60
1-nov-88	30-nov-88	\$ 99.630	30	\$ 1.101.792	\$ 9.182	1999	39,79	1987	3,60
1-dic-88	31-dic-88	\$ 99.630	31	\$ 1.101.792	\$ 9.488	1999	39,79	1987	3,60
1-ene-89	31-ene-89	\$ 99.630	31	\$ 859.975	\$ 7.405	1999	39,79	1988	4,61
1-feb-89	28-feb-89	\$ 99.630	28	\$ 859.975	\$ 6.689	1999	39,79	1988	4,61
1-mar-89	31-mar-89	\$ 99.630	31	\$ 859.975	\$ 7.405	1999	39,79	1988	4,61
1-abr-89	30-abr-89	\$ 99.630	30	\$ 859.975	\$ 7.166	1999	39,79	1988	4,61
1-may-89	31-may-89	\$ 99.630	31	\$ 859.975	\$ 7.405	1999	39,79	1988	4,61
1-jun-89	30-jun-89	\$ 99.630	30	\$ 859.975	\$ 7.166	1999	39,79	1988	4,61
1-jul-89	31-jul-89	\$ 99.630	31	\$ 859.975	\$ 7.405	1999	39,79	1988	4,61
1-ago-89	31-ago-89	\$ 99.630	31	\$ 859.975	\$ 7.405	1999	39,79	1988	4,61
1-sep-89	30-sep-89	\$ 99.630	30	\$ 859.975	\$ 7.166	1999	39,79	1988	4,61
1-oct-89	31-oct-89	\$ 99.630	31	\$ 859.975	\$ 7.405	1999	39,79	1988	4,61
1-nov-89	30-nov-89	\$ 99.630	30	\$ 859.975	\$ 7.166	1999	39,79	1988	4,61
1-dic-89	31-dic-89	\$ 99.630	31	\$ 859.975	\$ 7.405	1999	39,79	1988	4,61
1-ene-90	31-ene-90	\$ 99.630	31	\$ 682.178	\$ 5.874	1999	39,79	1989	5,81
1-feb-90	28-feb-90	\$ 99.630	28	\$ 682.178	\$ 5.306	1999	39,79	1989	5,81
1-mar-90	31-mar-90	\$ 99.630	31	\$ 682.178	\$ 5.874	1999	39,79	1989	5,81
1-abr-90	30-abr-90	\$ 99.630	30	\$ 682.178	\$ 5.685	1999	39,79	1989	5,81
1-may-90	31-may-90	\$ 99.630	31	\$ 682.178	\$ 5.874	1999	39,79	1989	5,81
1-jun-90	30-jun-90	\$ 99.630	30	\$ 682.178	\$ 5.685	1999	39,79	1989	5,81
1-jul-90	31-jul-90	\$ 99.630	31	\$ 682.178	\$ 5.874	1999	39,79	1989	5,81
1-ago-90	31-ago-90	\$ 99.630	31	\$ 682.178	\$ 5.874	1999	39,79	1989	5,81
1-sep-90	30-sep-90	\$ 99.630	30	\$ 682.178	\$ 5.685	1999	39,79	1989	5,81
1-oct-90	31-oct-90	\$ 111.000	1	\$ 760.030	\$ 211	1999	39,79	1989	5,81
1-nov-90	30-nov-90					1999	39,79	1989	5,81
1-dic-90	31-dic-90					1999	39,79	1989	5,81
TOTAL DIAS			3600						
TOTAL SEMANAS			514,29						

Ingreso Base de Liquidacion -IBL-	\$ 787.664,54
Semanas Cotizadas	514,29
Tasa de reemplazo	75%
Valor pensión	\$ 590.748

Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2000	8,75%		\$ 590.748	\$ 0
2001	7,65%		\$ 642.438	\$ 0
2002	6,99%		\$ 691.585	\$ 0
2003	6,49%		\$ 739.927	\$ 0
2004	5,50%		\$ 787.948	\$ 0

2005	4,85%		\$ 831.285	\$ 0
2006	4,48%		\$ 871.603	\$ 0
2007	5,69%		\$ 910.650	\$ 0
2008	7,67%		\$ 962.466	\$ 0
2009	2,00%		\$ 1.036.287	\$ 0
2010	3,17%		\$ 1.057.013	\$ 0
2011	3,73%		\$ 1.090.521	\$ 0
2012	2,44%		\$ 1.131.197	\$ 0
2013	1,94%		\$ 1.158.798	\$ 0
2014	3,66%		\$ 1.181.279	\$ 0
2015	6,77%		\$ 1.224.514	\$ 0
2016	5,75%		\$ 1.307.413	\$ 0
2017	4,09%	2,83	\$ 1.382.589	\$ 3.912.728
2018	3,18%	14	\$ 1.439.137	\$ 20.147.923
2019	3,80%	14	\$ 1.484.902	\$ 20.788.627
2020	1,61%	14	\$ 1.541.328	\$ 21.578.595
2021	5,62%	14	\$ 1.566.144	\$ 21.926.011
2022		14	\$ 1.654.161	\$ 23.158.252
TOTAL			\$ 111.512.137	